

SUMARIOS

G. Higuera: *Biogenética y derecho* (pp. 7-35). El rápido avance cuantitativo y cualitativo de las técnicas biogenéticas humanas, tanto en su faceta de IA, con todas sus variedades, como en la de ingeniería y manipulación genética, produce numerosas consecuencias en los más distintos saberes y haceres humanos. El campo del derecho positivo resulta uno de los más afectados quedando manifiestas sus inadecuaciones y carencias. Por otra parte, al tiempo en que se pondera la importancia de las técnicas biogenéticas, se siente la necesidad de regularlas en derecho. La labor ya está en marcha en bastantes y diversificadas naciones.

Atendiendo a las dos facetas, el presente artículo en su primera parte trata de la 'Vertiente biogenética' exponiendo las nuevas realidades conseguidas tanto en sí mismas como en su aleccionadora cronología con una pretensión que quiere ser exhaustiva en sus once concretos apartados. En la segunda parte se trata de la 'Vertiente jurídica' analizando las posibles posturas del legislador, la finalidad de la legislación, sus límites, el itinerario legal que hay que recorrer y el contraste ético/moral. En esta parte se hace desfilar una decena de problemas filosófico-jurídicos por un lado; y, por otro, las principales realidades jurídico-positivas ya logradas en distintos estadios y Estados, tanto convergiendo como divergiendo. Al Consejo de Europa se le ha dedicado el oportuno lugar merecido por su labor profunda en intento de homologación, al menos para la legislación de los países miembros. Un detenido examen se dedica a la labor prelegislativa desarrollada en España por medio de la 'Comisión Especial de Estudio de la FIV y la IA Humanas'. Y, por fin, el contraste que puede surgir entre ética-moral-derecho canónico ante las *leges ferendae* y las *leges latae* positivas en materia de técnicas de reproducción humana e ingeniería y manipulación genética también del hombre.

G. Dole: *Gratuidad del culto y subsistencia de sus ministros* (pp. 37-70). El autor, conocido sobradamente por sus investigaciones sobre la remuneración del clero, ha buscado a través de las fuentes escriturísticas e institucionales de la disciplina canónica los principios que regulan la subsistencia del clero desde los orígenes de la Iglesia hasta nuestros días. El presente análisis se inscribe en una obra del mismo autor, consagrada a la especificidad de la actividad religiosa en derecho francés y titulada 'Las profesiones eclesiásticas. Ficción jurídica y realidad sociológica' (de próxima aparición). La retribución eclesiástica bajo sus diversas formas comporta una ambigüedad conceptual que alcanza particularmente a la antinomía existente entre la gratuidad fundamental del culto y la apariencia lucrativa de algunas funciones canónicas. El término de *remuneratio*, conservado por el CIC de 1983, implica la idea de una correlación entre el cumplimiento de un servicio eclesial y su retribución. Ahora bien: mientras que en el caso de los laicos contemplados por el can. 231 esta remuneración es el objeto de un derecho formal (*ius habent*), en relación con los

clérigos el can. 281 emplea la palabra *merentur*, si bien esta reminiscencia evangélica de Luc 10, 7 no excluye completamente la existencia de un derecho subjetivo en los clérigos. La diferencia de los términos adoptados por el CIC subraya el carácter *sui generis* de la obligación que tiene la comunidad eclesial de subvenir a la subsistencia de sus ministros (can. 222, 1), ya que al lado de aquellos que viven excepcionalmente de unas rentas propias o de un trabajo laico (can. 281, 3) otros pueden optar a la *honestas sustentatio* gracias a la remuneración de su oficio canónico. Según este principio, heredado de la antigüedad cristiana, la práctica eclesial se ha desarrollado de diferentes maneras en el curso de los siglos: hospitalidad primitiva, las ofrendas, la institución de una renta ofrecida por el obispo, el sistema benefical, la contribución del Estado a la remuneración del clero... Esta, finalmente, ha llegado a ser una carga fundamental para la Iglesia, irreductible a la noción contractual de ganancia profesional.

M.^a G. Moreno Antón: *Algunas consideraciones en torno al concepto de bienes eclesiásticos en el CIC de 1983* (pp. 71-91). En este artículo se aborda la novedosa configuración legal de los bienes eclesiásticos en el Codex de 1983 y las consecuencias jurídicas que de ella derivan. El trabajo parte del derecho de la Iglesia a la posesión de bienes materiales, como medios necesarios para el cumplimiento de su misión, y, al mismo tiempo, establece los límites de ese derecho que no son otros que los fines a los que deben destinarse los bienes especificados en el can. 1254 2º. Sobre estas bases, se hace un análisis de la conceptualización legal de los bienes eclesiásticos, en el que, tras exponer los posibles criterios apuntados por la doctrina para su determinación, se concluye que tanto el C.I.C. de 1917 como el actual de 1983 utilizan el criterio de la pertenencia para configurar los bienes eclesiásticos, pero con una diferencia básica: en la legislación canónica vigente sólo son bienes eclesiásticos los pertenecientes a una persona jurídica canónica pública, mientras que en el Codex anterior lo eran todos los pertenecientes a cualquier persona moral eclesiástica. Consecuencias jurídicas básicas de la nueva configuración de los bienes eclesiásticos son: su sometimiento a un régimen jurídico determinado (las normas del C.I.C. y subsidiariamente los estatutos del ente propietario) y el hecho de que su gestión se sujete a la suprema administración y dispensación del Romano Pontífice, distinta de la 'auctoritas' que es ejercida sobre todos los bienes existentes en la Iglesia.

Juan Cándido Matías Vicente: *La clerecía en los sínodos astur-leoneses del siglo XII al XVI* (pp. 93-136). En el presente estudio se aborda el tema del estatuto de los clérigos en el derecho sinodal de las diócesis de Astorga, León y Oviedo, comparándolo con el de otras del occidente Peninsular (Galicia, Portugal, etc.) y con el derecho canónico común de la época. En sucesivos apartados, se trata de los privilegios clericales, los deberes positivos (hábito eclesiástico y decoro personal, virtudes, estudios, etc.) y negativos (actividades prohibidas: comercio, juegos aleatorios, caza, uso de armas, frecuentación de tabernas). De este tratamiento emergen tanto los elementos comunes como los diferenciales entre las diócesis asturleonesas y las restantes que sirven de punto de referencia así como con respecto al derecho común medieval.

G. García Cantero: *Aspectos religiosos de la nueva ley de tutela* (pp. 139-48). La tendencia secularizadora del Derecho español de Familia ha proseguido con la promulgación de la Ley de 24 de Octubre de 1983 por la que se reforman las instituciones de guarda y protección. Pero, a diferencia de otras leyes, la de tutela

ha incidido principalmente en el plano técnico (por ejemplo sustitución de la tutela de familia por la tutela de autoridad, introducción de la curatela, admisión de la persona jurídica en calidad de tutor) limitándose, en el plano religioso, a eliminar ciertas disposiciones de carácter secundario e, incluso, anecdótico tales como la incapacidad para ser tutor de los religiosos profesos y la excusa que podían invocar los eclesiásticos para el ejercicio de cargos tutelares. De mayor trascendencia puede ser, en el futuro, el desplazamiento del órgano tutelar encargado de decidir la educación del pupilo, que de ser el Consejo de Familia ha pasado a ser el tutor. Por otra parte se abre un importante campo de acción apostólica para las organizaciones de la Iglesia dedicadas a la educación y asistencia de jóvenes con la posibilidad de asumir el cargo de tutores de menores o incapacitados. Otras objeciones a la ley (por ej. insuficiencia de medios puestos a disposición de los jueces para el seguimiento de las tutelas ya constituidas) exceden del ámbito de esta Revista.

José M.^a de la Cuesta: *Aspectos jurídico-civiles del tratamiento de los bienes muebles de la Iglesia Católica en la Ley de Patrimonio Histórico español de 25 de Junio de 1985* (pp. 149-62). Se examinan en este breve estudio los graves inconvenientes que presenta la técnica empleada por el legislador español en la reciente Ley de Patrimonio Histórico de 25 de Junio de 1985 en relación con los bienes muebles propiedad de entes eclesiásticos, especialmente desde la perspectiva del Derecho civil. El estudio se centra en los apartados 1 y 3 del art. 28 de la citada Ley, que consagran respectivamente la inalienabilidad y la imprescriptibilidad de los bienes muebles que, individualizadamente o no, la Administración declare de Interés Cultural o incluya en el Inventario General, trasladando así ciertas notas del dominio público en sentido técnico, a bienes que continúan siendo de propiedad privada. El significado de esta traslación de notas típicas del dominio público, constituye desde el punto de vista del Derecho privado, algo así como la resurrección de la «Mano muerta», contra la que luchó el movimiento constitucionalista y codificador durante todo el pasado siglo, lo que desemboca en inevitables fricciones con los principios inspiradores del Código civil en materia de orden público económico y especialmente, de tráfico de los bienes muebles, razón por la que no es extraño que los citados preceptos resulten de muy difícil inserción en el sistema del Código civil. Tales dificultades han sido afrontadas por el legislador con gran desacierto, pues las prohibiciones de enajenar y la imprescriptibilidad, son de dudosa eficacia en materia presidida por la máxima «la posesión de buena fe equivale al título», tendente ante todo a la salvaguardia de la seguridad del tráfico jurídico a través de la firmeza de las adquisiciones. Por otra parte, tales normas pueden tener efectos perturbadores en cuanto a la reivindicabilidad de los bienes objeto de hurto o robo, por lo que, dado lo absurdo de algunas de sus consecuencias y su problemática aplicabilidad, se concluye postulando *de lege ferenda*, la supresión de esta injustificada discriminación.

Domingo J. Andrés: *Modelo de estatutos diocesanos para los eremitanos de una Iglesia Particular. Comentario aplicativo al can. 603 del CIC* (pp. 163-203). Introdutoriamente, el autor escribe sobre la perenne actualidad y el seguro porvenir del Eremitismo, dadas las condiciones que viven hoy el Mundo y la Iglesia. Afirma tratarse de una corriente caudalosa, si bien fluida y huidiza a la cuantificación estadística, a la moderación pastoral y a la precisa definición de sus legítimas formas. Declara, en fin, que los Estatutos que ha elaborado, desarrollan sólo, aunque de forma completa, el Eremitismo diocesano recientemente admitido por la Iglesia en el can. 603 del Código de derecho canónico. Con ello, confiesa haber obedecido a las solicitudes

simultáneas de algunos núcleos de Ermitaños y de algunos Obispos. Los Estatutos forman un todo orgánico e íntimamente entrelazado como *único Estatuto*. No obstante, vienen divididos en tres partes:

1ª. *El Estatuto canónico* normativiza de principio a fin todos los valores de esta forma de consagración: Tradición, erección, derecho por el que se rige, ideales y espiritualidad, consejos evangélicos, plegaria, penitencia, soledad, iniciación, incorporación, vida en el Eremitorio y abandono.

2ª. *El Estatuto de la Asociación diocesana*, se propone como posibilidad asociativa a nivel diocesano, pero desarrollada en subordinación y al servicio de la autonomía y soledad del carisma personal del Ermitaño.

3ª. *El Estatuto personal*, después de declarar su propia naturaleza y dignidad, como pieza maestra para la santificación del Ermitaño y como elemento clave que integra el cosmos jurídico que regula su vida, contiene todos los espacios autonómicos abiertos para el Ermitaño por el Estatuto canónico, explotando subjetiva y personalmente los cuales, dicho Ermitaño puede expresar mucho mejor su peculiar idiosincrasia.

E. Aznar Vallejo: *Los inicios de la Bula de Cruzada de Canarias* (pp. 205-19). El espíritu de cruzada, o confrontación militar con el infiel, tuvo su más claro exponente en la predicación de las bulas de igual nombre, que estimulaban el enfrentamiento bélico mediante la concesión de una serie de indulgencias. Tras su conquista en el siglo xv, las Islas Canarias conocieron la propagación de este instrumento, aunque sin la característica que primitivamente lo definió, cual fue el reclutamiento de combatientes por la fe. Ello se explica por las transformaciones políticas y militares del final de la Edad Media, que dieron preferencia a las colaboraciones económicas sobre las aportaciones humanas. Las principales repercusiones del mencionado espíritu en el Archipiélago fueron la concesión de la Bula de Canaria y la predicación de las bulas generales de Cruzada. La primera es la gran desconocida del campo de la Cruzada y, como tal, ausente de las obras de los estudiosos del tema. La explicación de este olvido hay que buscarla en el carácter primigenio de la bula, que era de apoyo a la nunciatura misionera de Guinea e Islas del Mar Océano. Ahora bien, la intervención regia la transformó de un instrumento para la 'conversión' en un útil para la 'conquista evangelizadora'. El desarrollo de tales predicaciones proporciona valiosa información acerca de aspectos económicos (como el hecho de que los ingresos de Cruzada supusiesen 3/4 del valor de las rentas reales en las Islas), jurisdiccionales (ya que la autoridad real debía intervenir contra los abusos de los oficiales de Cruzada), sociales (como la redistribución de la población aborigen tras la conquista), de mentalidad (caso de la posibilidad de componer económicamente asuntos como la conmutación de votos o las dispensas matrimoniales), etc.

M. López Alarcón, *La personalidad jurídica civil de las asociaciones canónicas privadas* (pp. 383-410). Las asociaciones canónicas privadas reguladas por el *Codex* de 1983 introducen un nuevo género asociativo que se caracteriza por su constitución en virtud del acuerdo de los fieles, no reciben misión de la Iglesia, ni obran en nombre de ella y se rigen por sus propios estatutos. Son personas *in Ecclesia* en cuanto sus fines son eclesiásticos, por lo que los estatutos han de ser revisados por la autoridad eclesiástica y están sujetas a su vigilancia. Dicha autoridad puede otorgarles personalidad jurídica mediante decreto, previa aprobación de los estatutos, de

modo que carecerán de ella las otras personas privadas cuyos estatutos hayan sido meramente revisados o aprobados sin pasar el trámite de otorgamiento de personalidad, así como las asociaciones de hecho, cuyos estatutos no hayan sido ni revisados ni aprobados, que también tendrán subjetividad jurídica y se registrarán por lo dispuesto en el can. 312. El Acuerdo jurídico con la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, solamente permite el reconocimiento de la personalidad civil a las asociaciones que gocen de personalidad jurídica canónica, por lo que se priva de dicho reconocimiento a las personas canónicas privadas que no tengan concedida la personalidad jurídica en la Iglesia. Consecuentemente, si estas asociaciones privadas de hecho pretenden obtener la personalidad jurídica civil tendrán que constituirse como asociaciones civiles conforme a la legislación común del Estado, dando lugar a la especie de asociaciones canónicas en forma civil y, desde el Estado, a asociaciones civiles con fin religioso.

J. A. Eguren, *La Iglesia Misionera en el nuevo Código de Derecho Canónico* (pp. 411-39). El nuevo Código dedica los cánones 781-792 al desarrollo de la actividad misional «por la que la Iglesia se implanta en pueblos en los que aún no está enraizada». Ante todo se precisan las condiciones necesarias para discernir una Iglesia como Misionera, en el sentido estricto de la palabra, teniendo en cuenta la finalidad, su objeto material y territorial, así como el sujeto de la Misión. En las Diócesis de tradición cristiana, al Obispo le corresponde la coordinación de la actividad misional cultivando vocaciones misioneras, promoviendo las Obras pontificias misionales, estimulando la celebración del Domingo de las Misiones, entregando la cuota anual diocesana para las Misiones... Con el Prelado, deben colaborar los Institutos de vida consagrada, el Clero diocesano y el Laicado. Los Prelados Misioneros han de coordinar en su territorio toda la actividad misional y a él están sujetos todos los Misioneros, aún los Religiosos exentos en el terreno pastoral, comprometidos por convenios oportunos. El Prelado contará con medios excelentes en los Catequistas, en el Diálogo sincero, en el Catecumenado y en la solícita formación de los Neófitos, hasta lograr que lleven una vida digna del Evangelio de Cristo.

S. Panizo Orallo, *La capacidad psíquica necesaria para el matrimonio* (pp. 441-70). El matrimonio compromete la persona y la existencia humanas con una gran profundidad: ninguna otra opción de vida las compromete tanto. Por eso mismo, el matrimonio exige una gran disponibilidad del sujeto contrayente, tanto en el orden intelectual-volitivo, como en el plano de los afectos y de la capacidad de oblación y entrega de persona a persona. El contrayente ha de ser capaz de conocer valorativamente el matrimonio que contrae; y ha de ser capaz de quererlo con libertad y autonomía. Pero también ha de ser capaz de contituir con el «otro conyugal» la comunidad de vida y amor en que consiste el matrimonio: sin ésto el matrimonio se quedaría en una pura teorización sin contenido específico. El Papa, en su discurso, alerta a los jueces eclesiásticos sobre ciertos matices de esta incapacidad psicológica para el matrimonio.

F. R. Aznar Gil, *Las causas de nulidad matrimonial por incapacidad psíquica* (can. 1095, 3º) según la jurisprudencia rotal (pp. 471-505). El autor señala que uno de los temas más destacados en el Discurso dirigido por S. S. Juan Pablo II al Tribunal de la Rota Romana en 1987 fue el de la *incapacitas assumendi*: tanto su configuración canónica formal como su fuerte incidencia en el conjunto de las causas

de nulidad presentadas ante los tribunales eclesiásticos. Ambos temas son examinados desde el punto de vista de los datos ofrecidos por el Tribunal de la Rota: se expone, en primer lugar, una síntesis de las principales ideas que los sucesivos Romanos Pontífices han señalado en sus últimos discursos a este Tribunal destacándose que las cuestiones de la psiquiatría y la indisolubilidad matrimonial han sido constantes en los discursos pontificios. Y, en segundo lugar, se ponen de relieve las características que debe gozar la *incapacitas assumendi* para invalidar el consentimiento matrimonial: se analizan el proceso de codificación canónica del actual c. 1095, 3º y la reciente jurisprudencia rotal sobre el particular, destacándose a partir de ahí los datos más relevantes sobre la configuración técnico-formal de este capítulo de nulidad matrimonial: autonomía, origen, gravedad, antecedencia, perpetuidad, temporalidad, absoluta/relativa, etc.

J. J. García Failde, *La prueba procesal de la incapacidad psíquica matrimonial* (pp. 507-26).

1. La certeza, exigida para dictar sentencia judicial declarativa de nulidad matrimonial, es filosóficamente mera probabilidad que sin embargo es suficiente para proceder prudentemente en los asuntos prácticos como es el de la declaración de nulidad de un matrimonio.

2. La adquisición de esta certeza de las anomalías psíquicas que incapacitan para contraer válidamente el matrimonio es muy laboriosa por diversos motivos y normalmente no puede lograrse nada más que a través del procedimiento del conocimiento científico «asistemático» en el que consiste el conocimiento estadístico y al que equivale el método «compreensivo» entendido en el sentido estricto en el que lo entendió Jaspers.

3. En esta clase de causas es utilísima y a veces imprescindible la prueba «pericial» que, si bien no puede ser infravalorada, tampoco puede ser supervalorada.

4. Para ser admisible un dictamen pericial es preciso que el mismo esté basado en teorías psiquiátricas sólidamente fundadas y, además, no contrarias a los principios generales relativos a la libertad de la persona humana; tiene que poner de manifiesto el estado psíquico en el que se encontró el periciado en la época de la celebración del matrimonio evitando la tentación de retrotraer a esa fecha el estado psíquico en el que se encontraba el periciado en el tiempo del peritaje; no traspasa los límites de sus atribuciones si opina acerca de si aquel estado psíquico fue tal que entonces incapacitó/no incapacitó al periciado para contraer válidamente el matrimonio; no puede deducir sus conclusiones de hechos que no constan con certeza en los autos o de hechos, que, aún constando con certeza en los autos, no permiten deducir esas conclusiones que en consecuencia serían conclusiones ilógicas; las hipotéticas discrepancias entre diversos «peritajes» pueden en unas ocasiones y no pueden en otras ocasiones desvirtuar el valor de todos o de algunos de ellos.

G. Moreno Botella, *El carácter propio de las entidades religiosas y sus consecuencias en el Derecho laboral español* (pp. 529-50). Se aborda el estudio sobre el alcance y significado de las denominadas cláusulas de identidad religiosa del art. 6, 1 de la L.O.L.R. de 5 de julio de 1980 y su virtualidad y eficacia en el ámbito Jurídico-laboral, frente a los particulares que entran a desempeñar algún trabajo

por cuenta de una institución religiosa. La cuestión se aborda desde la perspectiva de lo que se denomina «organizaciones de tendencia» o «empresas ideológicas», al presentar una raíz de fondo común: el conflicto o choque entre el derecho de la institución a mantener su propia concepción ideológica o religiosa y el de los individuos que prestan servicios en ella, en los casos en que se produzcan divergencias ideológicas entre ambos. La solución que se propugna, es que en estos casos hay que actuar con suma prudencia y cautela, no pudiendo ofrecer soluciones generales válidas para todos los casos, siendo los tribunales los que decidirán caso por caso según las específicas circunstancias. Ahora bien, como apunte de solución, proponemos que el principio general de igualdad y no discriminación del art. 17, 1 del Estatuto de los Trabajadores, debe sufrir algún tipo de derogación, en el sentido de no aplicabilidad rigurosa del mismo, en relación a estas organizaciones.

M. Mier Menes, *La aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) a las entidades eclesiásticas* (pp. 551-63). La coexistencia en las entidades eclesiásticas de actividades no sujetas, sujetas y exentas y no exentas al I.V.A., así como la compleja y descentralizada estructura organizativa de dichas entidades, hará recomendable que, en la mayoría de las ocasiones, se elija como sujeto pasivo concreto a las propias unidades económicas que realizan las actividades sujetas, constituyendo un patrimonio separado, aunque carezcan de personalidad jurídica. Aunque tal supuesto no se contiene en la legislación española, el Acuerdo Iglesia-Estado declara no sujetas a ningún impuesto sobre el consumo (y el I.V.A. lo es), las adquisiciones de objetos destinados al culto, realizadas por la Iglesia Católica. El análisis semántico de los vocablos *objeto* y *culto*, conduce a la conclusión de que el mencionado supuesto de no sujeción afecta tanto a la adquisición de bienes muebles destinados al culto, como a la de bienes y servicios destinados a la construcción de templos y capillas. La Iglesia, por tanto, no tiene obligación de admitir las repercusiones del I.V.A. que pretenden hacerle sus suministradores de tales bienes y servicios. La Iglesia Católica y el Gobierno español, deberán llegar a acuerdos concretos sobre los problemas que las tesis anteriores suscitan, aprovechando los mecanismos previstos al efecto en el Acuerdo sobre Asuntos Económicos.

M. López, *Cursillos prematrimoniales, fe y sacramento del matrimonio* (pp. 565-75). La implantación de los cursillos prematrimoniales es un hecho en todas las diócesis, aunque la variedad de enfoques, contenidos y normativa que los acompaña producen una serie de interrogantes pastorales y jurídicos en su desarrollo. Un problema grave y de enorme repercusión pastoral es el que produce la ausencia o debilitamiento de la fe en los bautizados que quieren contraer el sacramento del matrimonio. Analizando la solución tradicional al problema y el nuevo enfoque que ha recibido en las últimas décadas por la doctrina, hay que centrar la atención en el desarrollo del Sínodo de Obispos de 1980 y en la Ex. Ap. *Familiaris consortio* de Juan Pablo II para llegar a la conclusión de que la fe no es necesaria para la válida celebración del sacramento del matrimonio. Otro problema es el de abordar los diversos medios que tienen a su alcance los pastores para resolver si deben, según derecho, admitir o no al sacramento a los fieles que lo soliciten. Y por último, defendiendo la utilidad de los cursillos, negar la obligatoriedad de los mismos como requisito *sine qua non* para acceder al sacramento del matrimonio.

R. M. Ramírez Navalón, *Reflexión sobre la Instrucción «Donum Vitae» en relación con algunos informes civiles* (pp. 577-90). La reciente Instrucción «Donum Vitae» de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, viene a confirmar el Magisterio de la Iglesia sobre dos temas: la manipulación embrionaria y la reproducción artificial humana. En esta reflexión sobre esta Instrucción se intenta descubrir y analizar los principios en que se basa la Iglesia para rechazar ambos procedimientos técnicos; y al mismo tiempo confrontarlos con los criterios seguidos para su regulación por los distintos informes civiles. Descubre así que aunque en ambos casos se parte del necesario respeto de la dignidad humana, en la práctica se llegan a distintas consecuencias. De esta forma la autora considera que la aproximación entre lo recomendado por la Iglesia y lo establecido por el Estado debe partir de una adecuada aplicación e interpretación de este derecho. La aceptación conjunta del valor absoluto de la persona constituye la oportunidad de un diálogo respetuoso y fructífero entre la ética-civil y la moral cristiana, esta coincidencia supone un criterio superior de unificación que nos permita establecer un campo común de actuación.

E. Diz Pintado, *Los centros sanitarios acreditados para la práctica legal del aborto. Texto y comentario* (pp. 591-608). La temática presentada en el presente trabajo, tiene como finalidad el estudio y puntual comentario de los textos legales en materia de aborto, con especial referencia al Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre los centros sanitarios acreditados para la práctica legal del aborto. Se establecen en este Real Decreto las normas que deben observarse en los centros sanitarios dedicados a prácticas abortivas. Pero puede observarse, junto a defectos técnicos importantes, las grandes facilidades que se brindan a la hora de realizar los abortos. No es ciertamente un modelo de garantía legal, sino que, por el contrario sus fallos, a veces graves, ponen de manifiesto no solo la inseguridad jurídica, sino también la inseguridad personal de las que van a abortar. Se alude también al recurso interpuesto contra este Real Decreto, por la Asociación Acción Familiar, junto con los pronunciamientos del Tribunal Supremo suspendiendo la aplicación del Real Decreto y desestimado el recurso de súplica interpuesto por el Abogado del Estado contra el Auto de este Supremo Tribunal en el que decretaba la mencionada suspensión. Estos pronunciamientos es lo último que en materia de aborto ha salido a la luz, y por tanto lo último a que se hace referencia en este trabajo.

ABSTRACTS *

G. Higuera: *Biogenetics and Law* (pp. 7-35). The rapid quantitative and qualitative advances in human biogenetical techniques, as much in its IA aspect with all its variations as in that of genetic manipulation and engineering, is producing many consequences in the most far reaching human sciences. The field of positive law is one of the most affected and its inadequacies and shortcomings are clearly manifested. On the otherhand, when on thinks of the importance of biogenetic techniques, one feels the necessity of regulating them in law. This task is already underway in many and different nations.

With due attention to the two aspects, the present article in the first part, deals with the 'Biogenetical Angle' and it sets forth the new successes achieved as much as in the themselves as in their teaching chronology with a pretension which wants to be exhaustive in its eleven defined sections. In the second part, it deals with the 'Juridical Angle', analysing the possible postures of the legislator, the finality of legislation and its limits, the legal course it is necessary to undertake, and the ethical/moral contrast. In this part, on the one hand, it presents dozens of philosophical-juridical problems; and, on the other, the principal-juridical successes which have already been achieved in different forums and states and are as much agreeing as disagreeing. The Council of Europe, at least in respect of the legislation of member states, has been chosen as the best place because of its great work in homologation. A detailed study is given to the prelegislative development work in Spain by means of the 'Comisión Especial de Estudio de la FIV y la IA humanas'. ('Special Commission of the Study of the Human FIV and IA'). And, finally, the contrast which can arise between ethics-moral-canon law in the face of positive '*leges ferendae*' and '*leges latae*' in the technical matters of human reproduction and engineering and the genetic manipulation also of man.

— G. Dole: *Gratuitousness of worship and provision of its ministers* (pp. 37-70). The author well known for his investigations into the remuneration of the clergy has searched throught the scriptural and the institutional sources of canonical discipline for the principles which regulate the provision of the clergy from the beginning of the church until our days. The present analysis is included in a work by the same author which deals with the specific of religious activity in French law and titled 'Las profesiones eclesiásticas. Ficción jurídica y realidad sociológica' ('The ecclesiastical professions. Juridic fiction and sociological reality') (shortly to be published). Ecclesiastical remuneration under its many forms has a conceptual ambiguity which includes especially the existing antimony between the fundamental

* Translated by John MacAulay

gratuitousness of worship and the apparent lucrateness of some canonical functions. The term '*renumeratio*', preserved by the 1983 Code, implies the idea of correlation between the fulfillment of an ecclesial service and its remuneration. Now then: while in the case of the laity contemplated by can. 231 this remuneration is the object of a formal right ('*ius habent*'); in respect of clerics, can. 281 uses the word '*merentur*', although this evangelic reminiscence of Lk. 10, 7 does not completely exclude the existence of a subjective right of clerics. The difference in the terms used by the CIC underlies the sui generis character of the obligation which the ecclesiastical community has to meet for the provision of its ministers (can. 222, 1), since on the one side there are those who as an exception live from their own resources or lay occupation (can. 281, 3), there are others who can choose the '*honesta sustentatio*' from the remuneration of their canonical office. According to this principle inherited primitive Christianity, ecclesial practice has developed in different ways down through the centuries: primitive hospitality, offerings, the institution of an income given by the bishop, the beneficial system, the State contribution to the provision of the clergy... This, finally, has come to be a fundamental obligation for the Church which cannot be compared to the contractual notion of professional earning.

M. G. Moreno Antón: *Some considerations regarding the concept of ecclesiastical goods in the 1983 CIC* (pp. 71-91). In this article is examined the new legal framework of ecclesiastical goods in the 1983 Codex and the jurisdictional consequences that arise therefrom. The work has as a starting point the right of the Church to possess material goods as a necessary means for the fulfillment of its mission and, at the same time, the article establishes the limits of that right which are no other than the ends to which the goods must be destined as specified in can. 1254 2°. On these foundations the article makes an analysis of the legal concept of ecclesiastical goods in which, after setting forth the possible criteria pointed out by doctrine for its determination, it concludes that as much as the 1917 CIC as the actual of 1983 use the criterion of ownership for the framework of ecclesiastical goods, but with a basic difference: in the present canonical legislation only ecclesiastical goods are those which belong to a public canonical juridical person, while in the previous Codex all were which belonged to any ecclesiastical moral person. Basic juridical consequences of the new framework of ecclesiastical goods are: their subjection to a determined juridical authority (the norms of CIC and subsidiarily the statutes of the entity of ownership) and the fact that their administration is subject to the supreme administration and steward of the Roman Pontiff, distinct from the '*autoritas*' which is exercised over all goods in the Church.

J. C. Matías Vicente: *The clergy in the astur-leonese synods of the XII to XVI centuries* (pp. 93-136). The present study examines the theme of the statute of clerics in the synodal law of the dioceses of Astorga, Leon and Oviedo, comparing it with others from the west of the Peninsula (Galicia, Portugal, etc.) and with the canon law contemporary of that period. In successive sections, it deals with the clerical privileges, the positive obligations (ecclesiastical dress and personal dignity, virtues, studies, etc.) and the negative obligations (forbidden activities: business, chance games, hunting, use of arms, frequenting of taverns). From this study there emerges as much the common elements as the different ones between the astur-leonese dioceses and the others which serve as a point of reference in respect of medieval canon law.

G. García Cantero: *Religious aspects of the new law of tutelage* (pp. 139-48). The secularising trend of Spanish law of the Family has proceeded with the promulgation of the law of 24 October 1983 by which institutions of custody and ward are reformed. But, different from other laws, that of tutelage has concentrated upon the technical plane (for example, the substitution of tutelage of family by the tutelage of tuthority, introduction of curatorship, admission of juridic person to have the capacity of tutelage) and, in the religious field, limits itself to eliminating certain dispositions of a secondary, or perhaps even of anecdotal, nature such as the incapacity of professed religious to be guardians and the excuse that ecclesiastics can invoke for the exercise of tutelary responsibilities. Perhaps of greater transcendence for the future is the change in the tutelary organ which has the responsibility for deciding the education of the ward which from being the Consejo de Familia (Council of the Family) has become the guardian. On the otherhand, an important field of apostolic action has been opened up for the organizations of the Church dedicated to the education and the help of youth with the possibility of assuming the responsibility of guardianship of minors and incapables. Other objections to the law (for example, insufficiency of means placed at the disposal of judges for the further follow up of tutelages already granted) excede the limits of this review.

J. M. de la Cuesta: *Juridical-civic aspects of the treatment of moveable goods of the Catholic Church in the Law of Spanish Historic Patrimony of the 25 June 1985* (pp. 149-62). This brief study examines especially from the perspective of civil law the serious inconveniences of the technique used by the Spanish legislator in the recent Ley de Patrimonio Histórico (Law of Historic Patrimony) of 25 July 1985 in respect of the moveable goods which are the property of ecclesiastical entities. The study concentrates on sections 1 and 3 of article 28 of the said Law which sanctions respectively inalienability and nonprescriptability of moveable goods which, individually or not, the Administration declares to be of Cultural Interest or includes them in the General Inventory and hence in the technical sense transferring certain aspects of public ownership to goods which continue to be private property. The significance of this transference of typical marks of public ownership constitutes from the point of view of private law something like the resurrecting of the «Mano muerta» («Dead hand») against which the constitutional and codifying movements struggled during all of the last century which resulted in inevitable frictions with the inspiring principles of the civil Code in the matter of economic public order an especially of the movement of moveable goods which resulted, not surprisingly, that it is very difficult to insert the stated precepts in the system of the Civil Code. Such difficulties have been faced by the legislator with a great blunder in that the prohibitions of alienating and of nonprescription are of doubtful efficacy in matters presided over by the maxim «possession of good faith is equivalent to title» which is intent above all on safeguarding the security of juridic movement through the stability of acquisitions. On the otherhand, such norms can have disturbing effects in as far as the reivindicability of goods which were objects of theft or robbery by which given the absurdity of some of the consequences and its problematic enforcement, one concludes postulating '*de lege ferenda*' the supression of this unjustifiable discrimination.

D. J. Andrés: *Model of diocesan statutes for the hermits of a Particular Church. Commentary aplicable to can 603 of the CIC* (pp. 163-203). As an introduction the

author writes about the lasting long actuality and sure future of hermetism given the conditions which the Church and the world live today. He affirms to be dealing with a great flowing current although perhaps fluid and evasive tregards statistical quantification, pastoral moderation and precise definition of its legitimate forms. Finally, he declares that the Statutes that he has elaborated only develop, although in a complete form, diocesan hermetism which was recently admitted by the Church in can. 603 of the Code of Canon Law. With that he confesses to respond to the simultaneous demands of some centres of Hermits and some ishops. The statutes form an organic wholeness and are intimately interlinked as '*one Statute*'. Nevertheless, they are divided in three parts:

1. '*The Canonical Statute*' normativises from the beginning to the end all the values of this form of consecration: tradition, erection, law by which it is ruled, ideals and spirituality, evangelic counsels, prayer, penance, solitude, initiation, incorporation, life in the hermitage and its abandonment.

2. '*The Statute of the Diocesan Association*' is proposed as an associating possibility at diocesan level but developed in subordination to and at the service of the autonomy and solitude of the personal carisma of the hermit.

3. '*The Personal Statute*', after declaring its propiate nature and dignity as a cornerstone for the sanctification of the Hermit and as a key element which integrates the juridic cosmos which regulates his life, and it contains all the autonomous spaces opened for the hermit by the Canonical Satatute, which exploiting personally and subjectively, the hermit can much better express his peculiar idiosyncrasy.

E. Aznar Vallejo: *The beginnings of the Bull of the Crusades of the Canarias* (pp. 205-19). The spirit of the Crusade, or the military confrontation with the infidel, had its clearest exposition in the preaching of the ulls of the same name which stimulated the belligerent conflict by means of the concession of a series of indulgences. The Canary Islands, after their conquest in the xv century, knew of the propogation of this instrument although without the characteristic which primitively defined it which was the recruitment of soldiers fro the faith. This is explained by the political and military transformations at the end of the Middle Ages which gave preference to economic help rather than human contributions. The principle repercussions of the mentioned spirit in the Archipelago were the concession of the Bull of the Canarias and the preaching of the general ulls of the Crusade. The former is the great unknown in the field of the Crusade and therefore absent from the studies on the theme. For the explanation of this omission it is necessary to look at the primogeniture character of the Bull which was of help to the missionary nunciature of Guinea and the Islands of the Ocean Sea. Well now, the royal intervention transformed it from an instrument for the 'conversion' into a tool for the 'evangelising conquest'. The development of such preaching gives us valuable information about the economic aspects (such as the fact that the income of the Crusade would have entailed 3/4 of the value of the royal authority had to intervene against the abuse of the officials of the Crusade), social aspects (such as the redistribution of the native population after the conquest), and of mentality (instance the possibility of valuing economically such matters as the commutation of vows or matrimonial dispenses), etc.

M. López Alarcón: *The civil juridic personality of private canonical associations* (pp. 383-410). Private canonical associations regulated by the *Codex* of 1983 introduce a new associative species which is characterised by its constitution in virtue of the agreement of the faithful, but they do not receive a mission of the Church and neither do they work in its name and they are ruled by their own statutes. They are persons *in Ecclesia* in as far as their ends are ecclesiastical and hence their statutes have to be revised by the ecclesiastical authority and are subject to its vigilance. The said authority can grant them, after approbation of their statutes, juridic personality by means of a decree which other private persons lack as their statutes have been merely revised or approved without passing to the step of being granted juridic personality; thus like the associations *de facto* whose statutes have not been revised or approved which also have juridic subjectivity and are governed by what laid down in can. 312. The juridic Agreement with the Holy See of the 3 January 1979 only permits the recognition of civil personality to associations which enjoy canonical juridic personality and hence it deprives recognition to these private canonical persons which do not have conferred upon them juridic personality in the Church. Consequently, if these private associations *de facto* intend to obtain civil juridic personality, they will have to constitute themselves as civil associations in conformity with the legislation of the state, giving birth to a species of canonical association in the civil form and, from the state, civil associations with a religious end.

J. A. Eguren, *The Missionary Church in the new Code of Canon Law* (pp. 411-39). The new Code dedicates canons 781-792 to the theme of missionary activity 'whereby the Church is founded amongst peoples or groups where it has not taken root before'. Above all it details the necessary conditions for discerning which Church is missionary in the strict understanding of the word, taking into account the finality, its material and territorial object as well as the subject of the Mission. In the dioceses of Christian tradition the bishop has the responsibility of coordinating the missionary activity by encouraging missionary vocations, by promoting the pontifical missionary works, by stimulating the celebration of Mission Sunday, by giving the annual diocesan quota... The Institutes of consecrated life, the diocesan clergy and the laity must collaborate with the Prelate. The Missionary Prelates have to coordinate in their territory all missionary activity and to then are subject all missionaries even, in the pastoral field, those exent religious with whom proper agreements are to be formed. The Prelate will have excellent means in the Catechists, sincere dialogue, the Catechumenate, the careful formation of neophytes, until they reach a mature living of the gospel of Christ.

S. Panizo Orallo: *The necessary psychic for matrimony* (pp. 441-70). Matrimony commits the person and human existence to a profound extent: no other choice of life commits them as much. Hence, matrimony demands great resources on the part of the contracting subject, as much in the intellectual-will order, as on the level of the affective and of the capacity of sacrifice and giving of person to person. The contracting person has to be capable of being able to evaluate the matrimony he is contracting; and he has to be capable of wanting it with liberty and autonomy. But also he has to be capable of constituting with the «other conjugal» the community of life and love which matrimony is: without this, the matrimony would remain as a pure theorisation without specific content. The Pope, in his discourse, alerts the ecclesiastical judges to certain nuances of this psychological incapacity for matrimony.

F. R. Aznar Gil: *The cases of matrimonial nullity on account of psychic incapacity (can 1095, 3) according to rotal jurisprudence* (pp. 471-505). The author points out that one of the themes most notable in the Discourse given by Pope John Paul II to the Tribunal of the Roman Rota in 1987 was that of *incapacitas assumendi*: as much in its formal canonical framework as in its large incidence in all the cases of nullity presented before ecclesiastical tribunals. Both themes are examined from the point of view of data offered by the Tribunal of the Rota: first of all, a synthesis of the principal ideas which successive Roman Pontiffs have pointed out in their discourses to this Tribunal is presented and at the same time pointing out that questions of psychiatry and the indissolubility of marriage have been constant factors in the pontifical discourses. And, secondly, he emphasises the characteristics which *incapacitas assumendi* must enjoy to invalidate matrimonial consent: an analysis is made of the process of the canonical codification of the actual c. 1095, 3 and the recent rotal jurisprudence on the said taking from it the most relevant data for the technical-formal framework of this chapter of matrimonial nullity: autonomy, origin, gravity, antecedent, perpetual/temporal, absolute/relative, etc.

J. J. García Faílde: *The process proof of psychic matrimonial incapacity* (pp. 507-26).

1. The certainty demanded for giving a juridical declarative sentence of matrimonial nullity is philosophically mere probability which however is sufficient for proceeding prudently in practical matters as is the declaration of the nullity of a marriage.

2. The acquisition of this certainty from the psychic anomalies which incapacitate one for validly contracting marriage is very laborious for various reasons and normally one can achieve nothing more than can be achieved by the procedure of scientific «asistematic» knowledge which consists in statistical knowledge and which is the same as the «comprehensive» method understood in the strict sense as Jaspers understood it.

3. In this class of cases it is useful and at times indispensable that the «expert» report which cannot be undervalued must not be overvalued.

4. In order that the expert's report be admissible it is necessary that it is based on solidly founded psychiatric theories and also not contrary to the general principles related to the liberty of the human person; it has to set forth the psychic state which the subject had at the time of the celebration of the matrimony avoiding the temptation of antedating to that date the psychic state which the subject finds himself in at the time of being examined; it shall not step outwith the limits of its boundaries if it is of the opinion that indeed that psychic state was such that then it incapacitated/it did not incapacitate the subject for contracting matrimony validly; it can not deduce its conclusions from facts which are not verifiable with certainty in the judicial warrant do not allow the deductions of these conclusions which as a consequence would be illogical conclusions. The hypothetical discrepancies between different «experts» can on occasions and not on others deprive of value all or some of them.

G. Moreno Botella: *The propiate character of religious entities and their consequences in Spanish labour law* (pp. 529-50). The author studies the extent and the significance of the so called clauses of religious identity of art. 6, 1 of the L.O.L.R. of the 5 July 1980, and, in the light of individuals who work for a religious institute their virtuality and efficacy in the juridic-labour field. The question is considered from the perspective of that which is called «organisations of tendency» or «ideological companies» as they present a common root: the conflict or dispute between the right of the institution to maintain its own ideological or religious concept and that of individuals who give service in it when there are cases of an ideological difference between the two. The solution that is proposed is that in these cases it is necessary to proceed with great prudence and caution and it is not possible to offer a general solution which would be valid for all cases as it is the courts that will decide case by case according to each one's specific circumstances. As part of the solution, it is proposed that the general principle of equality and non discrimination of art. 17, 1 of the Estatuto de Trabajadores (Statute of Workers) must suffer some degree of repeal in the understanding of rigorously applying it to these organisations.

M. Mier Menes: *The application of Valued Added Tax (V.A.T.) to ecclesiastical entities* (pp. 551-63). The coexistence in ecclesiastical entities of activities not subject, subject and exempt, and subject and not exempt, of I.V.A. (V.A.T.), as well as the complexity and decentralised organising structure of such entities, will make it recommendable that on the majority of occasions, one chooses as passive concrete subject the very economic unities which realise the subject activities and constituting a separate patrimony although lacking of juridic personality. Although such a hypothesis is not contained in Spanish legislation, the Church-State Agreement declares that the acquisition of objects destined for the worship realised by the Catholic Church are subject to no consumer tax (and I.V.A. —V.A.T.— is that). The semantic analysis of the words *object* and *worship* leads to the conclusion that the mentioned hypothesis of not being subject affects as much the acquisition of moveable goods destined to worship as to gods and services destined to the construction of Temples and Churches. The Church, therefore, does not have the obligation of accepting the repercussions of I.V.A. (V.A.T.) which the suppliers of such goods and services seek to charge it. The Catholic Church and the Spanish government will have to reach, making use of the foreseen for such matters mechanisms in the Agreement for Economic Matters, definite agreements on the problems which the above raise.

M. López: *Prematrimonial courses, Faith and Sacrament of matrimony* (pp. 565-75). The existence of prematrimonial courses is a fact in all dioceses although the variety of emphasis, content and norms produces a series of pastoral and juridic questions about their development. A serious problem and of great pastoral repercussion is what produces the absence or weaknes of faith in the baptised who wish to contract the sacrament of matrimony. Analysing the traditional solution to the problem and the new emphasis which it has received in the dast decades from doctrine, it is necessary to centre attention on the development of the Synod of Bishops of 1980 and on Ex. Ap. *Familiaris Consortio* of John Paul II to reach a conclusion that faith is not necessary for the valid celebration of the sacrament of matrimony. Another problem is to examine the different means which pastors have at their hand to resolve if they must, according to law, the admission or not to the sacra-

ment of the faithful who so request. Finally, defending the utility of the courses, one has to deny them being obligatory as a requisite *sine qua non* for receiving the sacrament of matrimony.

R. M. Ramírez Navalón: *Reflection on the instruction «Donum Vitae» in relation with some civil reports* (pp. 577-90). The recent instruction «Donum Vitae» of the Sacred Congregation for Doctrine and Faith on the respect of the life of the recently born and the dignity of procreation reaffirms the Magisterium of the Church on two issues: embryo manipulation and human artificial reproduction. In this reflection on this instruction it is intended to discover and analyse the principles on which the Church bases itself for rejecting both technical procedures; and at the same time, comparing them with criteria followed for their regulation by different civil accounts. One thus discovers, although in both cases one leaves from the necessary respect for human dignity, that in practice one arrives at different consequences. In this way the author considers that the bringing together of that recommended by the Church and established by the state must start from an adequate application and interpretation of this right. The joint acceptance of the absolute value of the person constitutes the opportunity of a respectful and fruitful dialogue between civil and Christian moral. This coincidence supposes a superior criterion of unification which permits us to establish a common field of action.

E. Diz Pintado: *The health centres accredited for the practice of abortion. Text and commentary* (pp. 591-608). The theme presented in this work has as its object the study and commentary of the legal texts on the matter of abortion with special reference to the Royal Decree 2409/1986 of 21 November on the health centres accredited for the legal practice of abortion. It is established in this Royal Decree the norms that must be followed in health centres dedicated to abortive practices. But, it is noticeable that with the great technical defects there is a great facilities for the realising of abortions. It is certainly not a model of legal guarantee but on the contrary its faults, at times grave, highlight not only the juridic insecurity but also the personal insecurity of those who are going to abort. The article also makes reference to the appeal against this Royal Decree by the Asociación Acción Familiar (Association of Family Action) and also of the decrees of the Supreme Court suspending the application of the Royal Decree and rejecting the appeal presented by the Lawyer of the State against the sentence of the Supreme Tribunal in which it stated the said suspension. These statements are the latest in the question of abortion that have been issued and therefore the latest that have reference to this work.